

**SEÑORES:**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA  
SALA DE DECISION CIVIL (R)**

**E. S. D.**

**REFERENCIA:** ACCION DE TUTELA

**ACCIONANTE:** SOCIEDAD V1501 S.A.S

**ACCIONADA:** TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO INTEGRADO POR LOS  
ARBITROS DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO, GONZALO MÉNDEZ  
MORALES, JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ, DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

**IVAN FERNANDO ZARAMA CONCHA**, abogado mayor y vecino de Pasto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.981.500 de Pasto, con T.P. No. 50.358 del C.S. de la J., actuando en virtud del poder a mí conferido por **LUIS ERNESTO CHAVES MARTINEZ**, identificado con la cédula No. 12.970.828 de Pasto, quien obra en su condición de Representante Legal de **SOCIEDAD V1501 SAS**, sociedad comercial con domicilio principal en Pasto, con NIT 900.835.788-3, me permito presentar ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA en contra de TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO INTEGRADO POR LOS ARBITROS DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO, GONZALO MÉNDEZ MORALES, JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ, DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ por afectación a los derechos fundamentales de mi poderdante, referentes a, AL DEBIDO PROCESO E IGUALDAD JURÍDICA, A LA VULNERACIÓN EFECTIVA DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Todo esto con base en los siguientes

## **I. ANTECEDENTES**

- 1.1. La sociedad que represento, formuló demanda verbal de terminación de contrato de fiducia en contra de FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A, PATRIMONIO AUTONOMO, FIDEICOMISO V1501 representado por su vocera, FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., ante el CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
- 1.2. Junto con el escrito de demanda se presentó amparo de pobreza, considerando que la sociedad V1501 no tenía la capacidad de cubrir los gastos del proceso, dado la crítica situación financiera por la cual atraviesa la accionante, existente a la presentación del amparo y que a la fecha se mantiene.
- 1.3. Instalado el Tribunal Arbitral integrado por los abogados DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO, GONZALO MÉNDEZ MORALES y JORGE GABINO PINZÓN, el día 19 de noviembre de 2024 se profiere auto admisorio de la demanda con radicado

152220, negando el amparo de pobreza, ya que, según consideración del Tribunal, no se acreditó de forma objetiva la falta de capacidad financiera de la sociedad para atender los gastos del proceso.

- 1.4. Seguidamente, con auto fechado el 26 de noviembre de 2024, el Tribunal Arbitral se manifestó respecto al decreto de medidas cautelares que se habían solicitado con la presentación de la demanda, arguyendo que para que las mismas sean decretadas, se debe prestar la caución por la suma de ciento cincuenta millones de pesos (\$150.000.000), en un plazo de 10 días hábiles.
- 1.5. Para la sociedad accionante no fue posible presentar la caución en el término solicitado, razón por la cual, el 6 de febrero de la presente anualidad, nuevamente se solicitó amparo de pobreza, anexando la decisión de la superintendencia de sociedades que admite a la sociedad V1501 a trámite de insolvencia, cumpliendo con la exigencia que permite a las personas jurídicas acceder a dicho amparo.
- 1.6. Sin embargo, mediante providencia del 27 de febrero del año que corre, niegan nuevamente el amparo de pobreza, argumentando que la admisión a proceso de reorganización, si bien puede ser un indicio de dificultades financieras, no implica automáticamente la imposibilidad de sufragar los gastos procesales.
- 1.7. Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta recurso de reposición en contra de esa decisión argumentando que la exigencia de demostrar específicamente la situación económica a través de elementos demostrativos, impone una carga probatoria que la ley no contiene, obstaculizando con ello el acceso a la administración de justicia.
- 1.8. El 14 de abril de 2025 el Tribunal Arbitral decide no reponer el auto, insistiendo en la negativa de negar el amparo de pobreza, pues no existen elementos objetivos que demuestren la gravedad financiera.

## **II. CONCEPTO DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS.**

- 2.1. El amparo de pobreza en el proceso arbitral colombiano es objeto de regulación por el artículo 13 de la ley 1563 de 2012, en cuya redacción se remitió a la figura del entonces vigente código general del proceso, hoy código general del proceso.
- 2.2. La norma del CGP que trata este beneficio es el artículo 152, que en punto de la exigencia probatoria para quien pide el amparo, solo hace referencia al juramento, que, en este caso, no es otro que el juramento deferido por ley, de que trata el artículo 207 del código general del proceso.
- 2.3. No exige que con la solicitud se acompañe constancia, demostración alguna o contiene requisito adicional, como el señalado por el Tribunal al negar el amparo.
- 2.4. Cuando la norma procesal habla de “...la persona...” a la que se concede el amparo no hace distinción entre persona natural o jurídica.
- 2.5. Contrario a lo sostenido por el Tribunal, la exigencia probatoria se presenta respecto de quien solicita la terminación o amparo, parte que deberá, esa sí, acreditar que han

cesado los motivos afirmados con el juramento.

- 2.6. Por lo expuesto, incurre en grave error de interpretación el Tribunal de Arbitramento al exigir lo que la norma procesal, de orden público y obligatoria observación, no exige, limitando, de paso, el acceso a la justicia de la parte convocante.
- 2.7. No debe perderse de vista que la parte convocante, al tener claridad sobre la falta de recursos, no recurrió inicialmente al arbitraje para tramitar este proceso, sólo llegando a él por virtud de una excepción previa, donde también se expuso que no se contaría con recursos para atender estas expensas.
- 2.8. Entonces, no es de ahora que la parte demandante afirme su incapacidad económica, pues se ha dado a conocer en la propia demanda que existe proceso ejecutivo en curso, en el cual es demandada no solo la sociedad sino los socios, quienes fueron garantes de los créditos otorgados por Banco Davivienda.
- 2.9. Si enfrentar un proceso ejecutivo y un trámite de insolvencia no es prueba de falta de capacidad económica, no entendemos cómo acreditar esa situación que extraña el Tribunal.
- 2.10. Adicionalmente, obsérvese que al negar el amparo se afirma que no se acreditan las condiciones, pero no se le señala a la parte a que debe recurrir, más allá del juramento al que obliga la ley.
- 2.11. La parte que represento no tiene otra posibilidad de acreditar su mala situación que con la prueba de la insolvencia y de la ejecución que cursa en su contra, lo que claramente está probado y expuesto en el proceso.
- 2.12. De negarse el amparo la parte convocante no cubrirá los costos que demanda el Tribunal, razón por la cual se archivará la actuación y deberá recurrirse nuevamente a la justicia ordinaria, lo que generaría un nuevo desgaste, retornando al inicio de esta actuación que ya ha tenido una duración de más de dos años, por las razones aquí expuestas.

### **III. PRETENSIONES**

**PRIMERA.** Sírvase señor Juez disponer y ordenar a la parte accionada y en favor de la parte accionante, Tutelar los derechos fundamentales, AL DEBIDO PROCESO E IGUALDAD JURÍDICA, A LA VULNERACIÓN EFECTIVA DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

**SEGUNDA.** Consecuentemente con lo anterior, sírvase revocar el auto fechado el 14 de abril de 2025, proferido por el Tribunal de Arbitramento integrado por los árbitros DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO, GONZALO MÉNDEZ MORALES, JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ, de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ el cual decidió negar el amparo de pobreza solicitado por la sociedad V1501 S.A.S.

## IV. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

### 1. Legitimación por activa.

El derecho fundamental a la tutela, consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, otorga la posibilidad de acudir ante la jurisdicción constitucional con el fin de obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares en los casos previstos por la ley.

Este principio se encuentra desarrollado en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que:

*“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.”<sup>1</sup>*

Dicho precepto garantiza que cualquier persona natural o jurídica que vea en riesgo o afectación sus derechos fundamentales pueda acudir a la tutela de manera directa o a través de un apoderado judicial. Adicionalmente, la norma prevé la posibilidad de agenciar derechos de terceros cuando estos no puedan ejercer su propia defensa.

En el caso concreto, la Sociedad V1501 S.A.S, actuando a través de su representante judicial, acude a esta jurisdicción constitucional en razón de la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad procesal.

Esta afectación surge a partir de la negativa reiterada del Tribunal de Arbitramento conformado por los doctores Daniel Rodríguez Bravo, Gonzalo Méndez Morales y Jorge Gabino Pinzón Sánchez, quienes negaron de forma injustificada la solicitud de amparo de pobreza, impidiendo con esto el decreto de medidas cautelares esenciales para la protección de los intereses del accionante, a pesar de haberse aportado como prueba objetiva la admisión a trámite de insolvencia empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades, el Tribunal desestimó estos elementos sin valorar debidamente las implicaciones jurídicas y financieras que acreditaban la incapacidad económica de la sociedad demandante.

La exigencia de cumplir con cargas procesales económicas imposibles de atender en el contexto de un proceso de reorganización empresarial no solo constituye una barrera irrazonable de acceso a la justicia.

---

<sup>1</sup> Decreto 2591 de 1991. Art 10.

## **2. Legitimación por pasiva.**

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia establece que la acción de tutela tiene como finalidad garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales cuando estos resultan vulnerados o amenazados, ya sea por la acción u omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, por la actuación de particulares que puedan afectar gravemente el ejercicio de tales derechos.

La Corte Constitucional ha reiterado que para la procedencia de la acción de tutela deben cumplirse dos requisitos esenciales. En primer lugar, debe determinarse que el accionado es un sujeto respecto del cual la tutela es procedente, bien sea por tratarse de una entidad pública o de un particular cuyas actuaciones inciden en el goce efectivo de los derechos fundamentales. En segundo lugar, debe establecerse que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho fundamental puede ser atribuida, ya sea de manera directa o indirecta, a la acción u omisión del demandado.

En el presente caso, se configura una evidente vulneración de los derechos fundamentales de la sociedad V1501 por parte del Tribunal de Arbitramento integrado por los doctores Daniel Rodríguez Bravo, Gonzalo Méndez Morales y Jorge Gabino Pinzón Sánchez, quienes, en ejercicio de funciones públicas de administración de justicia, han negado de manera reiterada y sin una valoración objetiva de las pruebas allegadas, el amparo de pobreza solicitado, obstaculizando con ello el acceso efectivo a la justicia, igualdad procesal y el debido proceso.

La negativa injustificada a reconocer el amparo de pobreza, a pesar de las pruebas fehacientes sobre las dificultades económicas de la entidad actora, sumada a la exigencia de una caución imposible de cumplir dadas las condiciones de insolvencia debidamente certificadas, ha afectado gravemente el acceso a la administración de justicia y el derecho a la igualdad procesal. Esta actuación es imputable directamente al Tribunal Arbitral en su conjunto, en tanto órgano colegiado que adoptó las decisiones objeto de cuestionamiento.

## **3. Principio de Inmediatez.**

La acción de tutela también debe interponerse dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que se generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, de manera que se cumpla con la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente que pretende asegurar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.

En el presente caso, la vulneración de los derechos fundamentales de la sociedad V1501, relacionados con el acceso efectivo a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, tiene origen en las decisiones adoptadas por el Tribunal de Arbitramento en el trámite del proceso arbitral número 152220. Desde la negativa inicial al amparo de pobreza mediante auto de 19 de noviembre de 2024, la exigencia de una caución elevada mediante auto de 26 de noviembre de 2024, la nueva negativa a otorgar el amparo a pesar de la admisión del accionante a proceso de insolvencia mediante providencia de 27 de febrero de 2025, hasta la resolución del recurso de reposición mediante auto de 14 de abril del año que

corre, se ha mantenido una situación de afectación continua y persistente que impide el acceso a mecanismos de protección judicial efectiva.

A pesar de haber presentado la documentación que acredita la crítica situación económica del fideicomiso, el Tribunal mantuvo una carga probatoria excesiva no exigida por la ley, lo que ha perpetuado la vulneración de los derechos fundamentales de la sociedad accionante. Esta afectación sigue vigente, dado que la negativa de amparo de pobreza imposibilita el decreto de medidas cautelares y, por ende, la protección del patrimonio fiduciario en riesgo.

En este contexto, el requisito de inmediatez se encuentra plenamente satisfecho, pues la acción de tutela se interpone de manera oportuna, en un lapso razonable posterior a la última decisión desfavorable, y en atención a la persistencia actual de la vulneración. Por tanto, resulta indispensable la intervención urgente del juez constitucional para evitar la consumación de un daño irreparable y restaurar el goce efectivo de los derechos fundamentales comprometidos.

#### **4. Subsidiaridad.**

Como exigencia general de procedencia de la acción de tutela, conforme con el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, se destaca su carácter subsidiario, por lo cual sólo se autoriza su uso en alguna de las siguientes hipótesis: (i) cuando no exista otro medio de defensa judicial que permita resolver el conflicto relacionado con la supuesta vulneración de un derecho fundamental; o cuando, aun existiendo, (ii) dicho mecanismo no resulte eficaz e idóneo para la protección del derecho; o cuando, incluso, (iii) a pesar de brindar un remedio integral, resulte necesaria la intervención transitoria del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

Para el caso que nos ocupa, ya se acudió a los mecanismos dentro del proceso arbitral para defensa de los derechos, lo cual se evidencia con la presentación del recurso de reposición de fecha 14 de abril del presente año, sin embargo este fue negado, es por ello que la intervención del juez constitucional se hace entonces necesaria para restablecer la eficacia del acceso a la justicia y evitar la consolidación de un daño que afectaría gravemente los derechos fundamentales de la sociedad accionante.

### **V. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS.**

#### **5.1 DERECHO AL DEBIDO PROCESO**

En primer lugar, resulta indispensable resaltar lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-201 de 2015, en la cual se explicó que un defecto procedimental se configura cuando el operador judicial concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, lo que puede llevar a una denegación de justicia. La Corte señaló que este defecto se presenta cuando el juez:

*“Esta Corporación ha sostenido que en una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”,*

*cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales. Específicamente, según la jurisprudencia de esta Corporación, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el operador judicial concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, convirtiendo su actuar en un acto de denegación de justicia por: (i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) **exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada;** o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta porque el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situación que lo lleva a denegar o vulnerar el derecho al acceso a la administración de justicia.” (Negrilla propia)*

Este derecho se ve menoscabado en el caso en concreto, pues como se mencionó anteriormente, el Tribunal de Arbitramento, al exigir la demostración específica de la situación económica mediante elementos demostrativos, está imponiendo una carga probatoria que la ley no contempla. Esto se debe a las siguientes razones: (i) El artículo 13 de la ley arbitral en Colombia remite para sus requisitos al Código de Procedimiento Civil, indicando que se concederá “...en los mismos términos del Código de Procedimiento Civil...”. (ii) El Código de Procedimiento Civil regulaba en el artículo 161 los requisitos para el amparo de pobreza, norma que, con leves modificaciones de redacción, se recogió en el actual artículo 152 del Código General del Proceso. De la lectura de la norma, es claro que el único requisito probatorio exigido es el juramento, tratado en el artículo 207 del Código General del Proceso como juramento deferido por ley. Por lo tanto, la ley exige un solo requisito o prueba, el juramento, que puede ser desvirtuado por la contraparte aportando pruebas de que la capacidad económica existe o que las circunstancias que llevaron a solicitarlo y decretarlo han cesado, como lo señala el artículo 158 del Código General del Proceso. El Tribunal, al negar lo solicitado, no explica el fundamento de esta inversión de la carga de prueba, lo que, en opinión tutelante contradice una norma procesal expresa, que por su carácter de orden público es de obligatorio cumplimiento.

## **5.2 DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA**

Según sentencia T-283/13 , proferida por la Honorable Corte Constitucional, El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente

establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.

Por otro lado, en sentencia AL2871-2020 de la Corte Suprema de Justicia, se identificó dos requisitos exigibles para presentar la solicitud de amparo de pobreza: (i) Que la solicitud se presente bajo la gravedad de juramento, y (ii) Que la solicitud se formule por la persona que se halla en la situación que describe la norma.

En el caso en concreto al negar el amparo de pobreza indirectamente el Tribunal está negando el acceso a la administración de justicia de la sociedad que represento, quien desde la presentación de la demanda ante la Justicia Ordinaria manifestó no contar con recursos para atender a Tribunal Arbitral, razón por la cual, conociendo la cláusula compromisoria, hizo caso omiso de ella y acudió a la Justicia Ordinaria. Notificada Davivienda propuso excepción previa y en respuesta a la misma se expresaron las mismas razones de incapacidad económica que ahora se argumentan.

### **PRUEBAS**

Con el fin de establecer la vulneración y amenazas de los derechos fundamentales impetrados, solicito se sirva tener en cuenta las siguientes pruebas:

#### **DOCUMENTALES**

1. Auto fecha 19 de noviembre de 2024, el cual admite demanda y niega amparo de pobreza.
2. Auto fechado el 26 de noviembre de 2024, proferido por el Tribunal Arbitral, el cual fija caución.
3. Solicitud de amparo de pobreza de fecha 6 de febrero de la presente anualidad.
4. Auto del 27 de febrero del año que corre, el cual niegan el amparo de pobreza.
5. Recurso de reposición contra auto que niega amparo de pobreza.
6. Auto del 14 de abril de 2025, que niega recurso de reposición.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

- Fundamento esta acción en el artículo 86 de la constitución política y sus decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992.
- Artículo 29, 228 Constitucional.



## **FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL**

Fundamentamos esta acción sobre la base de lo establecido sentencia T-083 de 2023 Expediente T-8.991.462 Magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en donde trató el tema puntual del **DERECHO AL DEBIDO PROCESO**, estableciendo *“El artículo 29 de la Constitución consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe observarse en toda clase de actuaciones administrativas. En concordancia, el artículo 228 superior señala que el actuar de la administración de justicia debe estar sujeto al principio de prevalencia del derecho sustancial. En ese sentido, una providencia judicial que no garantice lo establecido en los dos artículos mencionados, puede incurrir en un defecto procedimental absoluto cuando el funcionario judicial se aparta del proceso correspondiente establecido en la ley o porque se abstiene de llevar a cabo una etapa sustancial del mismo. Por otra parte, en lo referente al acceso y al actuar de la administración de justicia, el defecto se puede presentar cuando se interpone la norma procesal como fin en sí misma y no como medio para materializar el derecho sustancial, convirtiéndose en un obstáculo que deriva en la denegación de un derecho material radicado en cabeza de quien lo alega, configurándose, de esta manera, un exceso ritual manifiesto, es decir, “una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales es decir, “una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.” (Negrillas fuera de texto)*

En la misma providencia Corte ha señalado que:

*“[L]os jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecido se solucionen los conflictos de índole material. Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material (art. 228).*

*De lo contrario se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material.*

Esta línea, ha sido sostenida por la corporación en múltiples ocasiones, como por ejemplo, en sentencias T-1306 de 2001, T-1123 de 2002, T-950 de 2003, T-289 de 2005, T-1091 de 2008, T-599 de 2009, T-268 de 2010, T-893 de 2011 y T-352 de 2012, entre otras, indicando que si bien el procedimiento y las formalidades son de gran importancia para los procesos y para el desarrollo de un Estado social de derecho, su aplicación no debe derivar en un sacrificio injustificado de la justicia material y de los derechos subjetivos, pues de ser así, se constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y como consecuencia, el juez de tutela está en la obligación de corregir esa situación y hacer prevalecer el derecho sustancial sobre las formas. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado, a su vez, que cuando se alegue la configuración de un defecto procedimental absoluto o por exceso ritual manifiesto, la procedencia de la acción de tutela, aunado a la verificación de los requisitos generales, debe estar sujeta a: (i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales.”

En relación con el derecho al acceso a la administración de justicia y al cumplimiento de fallos judiciales, la Corte, en su Sentencia T-048/19, ha indicado que “el debido proceso y el derecho a la jurisdicción incluyen el acceso libre e igualitario a los jueces y autoridades, así como la garantía de obtener decisiones razonadas en un plazo adecuado. También, establece la posibilidad de apelar dichas decisiones ante instancias superiores y la obligación de cumplir con lo dictaminado”.

En la Sentencia T-371 de 2016, la Corte explicó “que el cumplimiento de las sentencias es fundamental para el respeto a la Constitución y el incumplimiento representa una violación grave al Estado de derecho. Además, este principio se relaciona con los valores constitucionales de celeridad, eficacia y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, los cuales son esenciales en la función judicial y administrativa. Así, el cumplimiento de los fallos judiciales es un aspecto crucial del debido proceso.

La Corte también destacó que el derecho a una tutela judicial efectiva implica que las decisiones deben cumplirse en un tiempo razonable, lo cual busca hacer efectivos los derechos reconocidos en una sentencia. Cuando una autoridad se niega a cumplir con una sentencia adversa, no solo vulnera los derechos de la persona que obtuvo la protección judicial, sino que también desafía el orden jurídico al desacatar una

*decisión definitiva.*

### **COMPETENCIA**

Es usted, señor Juez competente, para conocer del asunto, por la naturaleza de los hechos y teniendo en cuenta el numeral 9 del decreto 333 de 2021, el cual sostiene que “*Las acciones de tutela dirigidas contra los Tribunales de Arbitraje serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la autoridad judicial que conoce del recurso de anulación.*”

### **JURAMENTO**

Bajo la gravedad del juramento, manifestamos que por este medio nos ratificamos en todo lo que queda expresado en esta acción y además, en cumplimiento de los artículos 37 del Decreto 2591 de 1992, manifestamos que no hemos intentado ninguna otra acción de tutela sobre los mismo hechos y derechos.

### **ANEXOS**

Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.

### **NOTIFICACIONES**

- A la entidad accionada, en los correos electrónico: -  
[radicaciondocumentosCAC@ccb.org.co](mailto:radicaciondocumentosCAC@ccb.org.co)  
[andreaatuestao@icloud.com](mailto:andreaatuestao@icloud.com)
- A la parte accionante a través del correo electrónico: **ivanzaco@hotmail.com** o la dirección física **Calle 19- 31b-57 Edificio Novacentro oficina 1202 Pasto-Nariño.**